



MANUEL CASTELLS

DUDA RUPURA

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

Segunda edición actualizada

Alianza Editorial

NUESTRO MUNDO, NUESTRAS VIDAS

Soplan vientos malignos en el planeta azul. Nuestras vidas titubean en el torbellino de múltiples crisis. Una crisis económica que se prolonga en precariedad laboral y en salarios de pobreza. Un terrorismo fanático que fractura la convivencia humana, alimenta el miedo cotidiano y da pábulo a la restricción de la libertad en nombre de la seguridad. Una marcha aparentemente ineluctable hacia la inhabitabilidad de nuestro único hogar, la Tierra. Una amenaza permanente de recurrir a guerras atroces como forma de tratar los conflictos. Una violencia rampante contra las mujeres que osaron ser ellas mismas. Una galaxia de comunicación dominada por la mentira, ahora llamada posverdad. Una sociedad sin privacidad en la que nos hemos convertido en datos. Y una cultura, denominada entretenimiento, construida sobre el estímulo de nuestros bajos instintos y la comercialización de nuestros demonios.

Pero aún hay una crisis más profunda, que tiene consecuencias devastadoras sobre la (in)capacidad de tratar las múltiples crisis

que envenenan nuestras vidas: la ruptura de la relación entre gobernantes y gobernados. La desconfianza en las instituciones, en casi todo el mundo, deslegitima la representación política y, por tanto, nos deja huérfanas de un cobijo que nos proteja en nombre del interés común. No es una cuestión de opciones políticas, de derecha o izquierda. La ruptura es más profunda, tanto a nivel emocional como cognitivo. Se trata del colapso gradual de un modelo político de representación y gobernanza: la democracia liberal que se había consolidado contra los estados autoritarios y el arbitrario institucional a través de lágrimas, sudor y sangre en los dos últimos siglos. Ya sea en España, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Corea del Sur y en múltiples países, asistimos desde hace un tiempo a amplias movilizaciones populares contra el sistema actual de partidos políticos y democracia parlamentaria bajo el lema de «¡No nos representan!». No es un rechazo a la democracia, sino a la democracia liberal tal y como existe en cada país, en nombre de «la democracia real», como proclamó en España el movimiento 15-M. Un término evocador que invita a soñar, deliberar y actuar, pero que desborda los límites institucionales establecidos.

De ese rechazo surgen liderazgos políticos que, en la práctica, niegan las formas partidarias existentes y trastocan en profundidad el orden político nacional y mundial. Trump, Brexit, Le Pen, Macron (enterrador de los partidos), el neofascismo de la Lega Nord en Italia, son expresiones significativas de un orden (o caos) postliberal. Como lo es la total descomposición del sistema político de Brasil, país fundamental de América Latina. O de un México víctima de un narcoestado hasta el intento de regeneración de López Obrador. O una Venezuela post-Chávez en cuasiguerra civil. O de la democracia surcoreana, con el derrocamiento popular de la corrupta presidenta Park Geun-hye, entregada al hechizo de Choi Soon-sil, líder de una secta ocultista. O de un presidente de Filipinas que practica la ejecución sumaria como forma de resolver la inseguridad. De dichas crisis institucionales surgieron en la última década algunas revoluciones populares que trataron de

articular una nueva relación entre representación parlamentaria y representación social, en particular en Bolivia y Ecuador. Pero en buena parte del mundo, en particular en China y Rusia, se consolidaron regímenes autoritarios que se constituyen en alternativas eficaces a la democracia liberal. Mientras que Oriente Próximo está gobernado por teocracias (Irán, Arabia Saudí) o dictaduras (Egipto, Siria), exceptuando Israel, que está en guerra permanente con sus territorios ocupados. Incluso en Europa del Este, la reacción identitaria contra la Unión Europea apunta a neofascismos en Hungría, Austria, Polonia, Chequia y, con matices, en otros países del este de Europa. Ciertamente siempre nos queda el consuelo de una Escandinavia democrática y representativa, pero solo si olvidamos que en Finlandia y Noruega partidos nacionalistas xenófobos están en el gobierno, en coalición con la derecha, y que en Dinamarca el gobierno depende del apoyo parlamentario de los xenófobos.

Este libro habla de las causas y consecuencias de la ruptura entre ciudadanos y gobiernos y de la madre de todas las crisis: la crisis de la democracia liberal que había representado la tabla de salvación para superar naufragios históricos de guerras y violencia. No ofreceré soluciones porque no las tengo. Y porque son específicas a cada país. Pero si la crisis política que constato tiene una dimensión global, por encima de las características propias de cada sociedad, habrá que pensar que se trata del colapso gradual de un modelo de representación. Un colapso que, de acentuarse, nos dejaría sin instrumentos legítimos para resolver colectivamente nuestros graves problemas, en el momento preciso en que arrecia el huracán sobre nuestras vidas.

1. LA CRISIS DE LEGITIMIDAD POLÍTICA: NO NOS REPRESENTAN

Érase una vez la democracia

Democracia, escribió hace tiempo Robert Escarpit, es cuando llaman a tu puerta a las cinco de la mañana y supones que es el lechero. Quienes vivimos el franquismo sabemos el valor de esa visión minimalista de democracia que todavía no se ha alcanzado en la mayor parte del planeta. Pero tras milenios de construcción de instituciones a quienes podamos delegar el poder soberano que, teóricamente, detentamos los ciudadanos, aspiramos a algo más. Y de hecho eso es lo que nos propone el modelo de democracia liberal. A saber: respeto de los derechos básicos de las personas y de los derechos políticos de los ciudadanos, incluidas las libertades de asociación, reunión y expresión, mediante el imperio de la ley protegida por los tribunales; separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial; elección libre, periódica y contrastada de quienes ocupan los cargos decisorios en cada uno

de los poderes, sumisión del Estado, y todos sus aparatos, a quienes han recibido la delegación del poder de los ciudadanos; posibilidad de revisar y actualizar la Constitución en la que se plasman los principios de las instituciones democráticas. Y, desde luego, exclusión de los poderes económicos o ideológicos en la conducción de los asuntos públicos mediante su influencia oculta en el sistema político. Por sencillo que parezca el modelo, costó siglos de sangre, sudor y lágrimas llegar a su realización en la práctica institucional y en la vida social. Aun teniendo en cuenta sus múltiples desviaciones de los principios de representación que aparecen en la letra pequeña de las leyes y en la práctica sesgada de parlamentarios, jueces y gobernantes. Por ejemplo, casi ninguna ley electoral aplica el principio de una persona, un voto en la correspondencia entre el número de votos y el número de escaños. Y la estructura del poder judicial depende indirectamente del sistema político, incluyendo los tribunales que interpretan los principios constitucionales. En realidad, la democracia se construye en torno a las relaciones de poder social que la fundaron y va adaptándose a la evolución de esas relaciones de poder pero privilegiando el poder que ya está cristalizado en las instituciones. Por eso no se puede decir que es representativa a menos que los ciudadanos piensen que están representados. Porque la fuerza y la estabilidad de las instituciones depende de su vigencia en las mentes de las personas. Si se rompe el vínculo subjetivo entre lo que los ciudadanos piensan y quieren y las acciones de aquellos a quienes elegimos y pagamos, se produce lo que llamamos crisis de legitimidad política, a saber, el sentimiento mayoritario de que los actores del sistema político no nos representan. En teoría, ese desajuste se autocorrigue en la democracia liberal mediante la pluralidad de opciones y las elecciones periódicas para optar entre dichas opciones. En la práctica, la elección se limita a aquellas opciones que ya están enraizadas en las instituciones y en los intereses creados en la sociedad, con obstáculos de todo tipo para los que intentan acceder a un cotarro bien delimitado. Es más, los actores políticos fundamentales, o sea los partidos, pueden diferir

en políticas, pero se acuerdan en mantener el monopolio del poder dentro de un marco de posibilidades preestablecidas por ellos mismos. La política se profesionaliza y los políticos se convierten en un grupo social que defiende sus intereses comunes por encima de los intereses de quienes dicen representar: se forma una clase política, que, con honrosas excepciones, trasciende ideologías y cuida su oligopolio. Además, los partidos como tales experimentan un proceso de burocratización interna, predicho por Robert Michels desde la década de los veinte, limitando su renovación a la competición entre sus líderes y apartándose del control y decisión de sus militantes. Es más, una vez realizado el acto de la elección, dominado por el marketing electoral y las estrategias de comunicación, con escaso debate y participación de militantes y electores, el sistema funciona autónomamente con respecto a los ciudadanos. Tan solo tomando el pulso de la opinión, nunca vinculante, mediante encuestas cuyo diseño controlan quienes las encomiendan. Aun así, los ciudadanos votan, eligen e incluso se movilizan y entusiasman por aquellos en quienes depositan sus esperanzas, cambiando de vez en cuando cuando la esperanza supera al miedo al cambio que es la táctica emocional básica en el mantenimiento del poder político. Pero la decepción recurrente de esas esperanzas va erosionando la legitimidad, al tiempo que la resignación va dejando paso a la indignación cuando surge lo insoportable. Como cuando en una crisis económica se salva a bancos fraudulentos con el dinero de los contribuyentes mientras se recortan servicios básicos para la vida de las personas. Con la promesa de que las cosas irán mejor si aguantan y siguen tragando y cuando no es así, hay que romper con todo o aguantar todo. Y el romper fuera de las instituciones tiene un alto coste social y personal, demonizado por medios de comunicación que, en último término, están controlados por el dinero o por el Estado, a pesar de la resistencia muchas veces heroica de los periodistas. En situación de crisis económica, social, institucional, moral, lo que era aceptado porque no había otra posibilidad, deja de serlo. Y lo que era un modelo de representación se desploma en la sub-

jetividad de las personas. Solo queda el poder descarnado de que las cosas son así y quien no lo acepte que salga a la calle, donde la espera la policía. Esa es la crisis de legitimidad.

Y eso es lo que está pasando en España, en Europa y en gran parte del mundo. Más de dos tercios de las personas en el planeta piensan que los políticos no los representan, que los partidos (todos) priorizan sus intereses, que los parlamentos resultantes no son representativos y que los gobiernos son corruptos, injustos, burocráticos y opresivos. En la percepción casi unánime de los ciudadanos la profesión peor considerada es ser político. Y tanto más cuanto que se reproducen eternamente y raramente vuelven a la vida civil mientras puedan medrar entre los vericuetos de la burocracia institucional. Este sentimiento ampliamente mayoritario de rechazo a la política realmente existente varía según países y regiones, pero se da en todas partes. Incluso en países, como Escandinavia, en donde la limpieza democrática ha sido una referencia esperanzadora, la tendencia de la opinión pública va en el mismo sentido desde hace un tiempo. Por eso me tomo la libertad de remitirle al compendio estadístico de fuentes fiables que se expone en la web relacionada con este libro para que el lector pueda hacer sus propias constataciones en diversas áreas del mundo. Para referirme, como ejemplo, al caso de España, si en el 2000 el 65% de los ciudadanos no confiaban en los partidos políticos, la desconfianza subió al 88% en 2016. La desconfianza en el Parlamento aumentó del 39% en 2001 al 77% en 2016, y en el gobierno, del 39% al 77%. Y subrayo el hecho de que este hundimiento de la confianza se refiere tanto a gobiernos socialistas como populares. De hecho, la mayor caída es un 80% de desconfianza en 2011, precipitando la espantada del gobierno del PSOE con Zapatero. Aun en menor medida, más de la mitad de los españoles tampoco confían en el sistema legal (el 54% en 2016, comparado con el 49% en 2001). Mientras que las autoridades regionales y locales no salen tampoco bien paradas, aunque en este caso ha habido un descenso de la desconfianza desde su máximo del 79% en 2014 al 62% en 2017 tras la elección de los municipi-

pios del cambio (liderados por Podemos y confluencias) en 2014. En fin, la policía es la mejor considerada. Tan solo el 36% de los ciudadanos desconfiaban en 2014 y la tendencia es a la baja de la desconfianza: 24% en 2017. La intervención policial contra la corrupción y el instinto de buscar un orden más allá de los políticos parecen favorecer la idea de que los servidores del Estado son más fiables que sus jefes. No es de extrañar, puesto que casi las tres cuartas partes de los españoles en 2016 pensaban que «los políticos no se preocupan de la gente como yo» y que «esté quien esté en el poder siempre benefician a sus intereses personales».

Ahora bien, si las cosas son así en el ámbito mundial, aun salvando las diferencias, tal vez sea ese el sino de cualquier institución humana. También de la democracia liberal. Seguimos refiriéndonos frecuentemente al célebre dictamen de Churchill en 1947, según el cual «la democracia es la peor forma de gobierno excepto todas las otras que se han intentado de vez en cuando». Tal vez. Pero más allá de un debate metafísico sobre la esencia de la democracia, lo que observo es que cada vez menos gente se cree esta forma de democracia, la democracia liberal, al tiempo que la gran mayoría sigue defendiendo el ideal democrático. Precisamente porque la gente quiere creer en la democracia el desencanto es aún más profundo en relación con la forma en que la viven. Y de ese desencanto nacen comportamientos sociales y políticos que están transformando las instituciones y las prácticas de gobernanza en todas partes. Eso es lo que creo importante analizar. En cuanto a la inevitabilidad de la perversión del ideal democrático, no creo muy útil filosofar sobre la malhadada naturaleza humana, discurso paralizante justificador de la continuidad de este orden de cosas. Más relevante es investigar algunas de las causas del porqué la separación entre representantes y representados se ha acentuado en las dos últimas décadas, hasta llegar al punto de ebullición del rechazo popular a los de arriba, sin distinciones. Algo que desde el *establishment* político y mediático se denomina peyorativamente como populismo porque son comportamientos que no reconocen los sesgos canales institucionales que se ofrecen para el

cambio político. En realidad, las emociones colectivas son como el agua: cuando encuentran un bloqueo en su flujo natural abren nuevas vías, frecuentemente torrenciales, hasta anegar los exclusivos espacios del orden establecido.

Las raíces de la ira

La crisis de la democracia liberal resulta de la conjunción de varios procesos que se refuerzan mutuamente. La globalización de la economía y de la comunicación ha socavado y desestructurado las economías nacionales y limitado la capacidad del Estado-nación a responder en su ámbito a problemas que son globales en su origen, tales como las crisis financieras, los derechos humanos, el cambio climático, la economía criminal o el terrorismo. Lo paradójico es que fueron los estados-nación los que estimularon el proceso de globalización, desmantelando regulaciones y fronteras desde la década de los ochenta, en las administraciones de Reagan y Thatcher, los dos países líderes de la economía internacional entonces. Y son esos mismos estados los que están replegando velas en este momento, bajo el impacto político de los sectores populares que en todos los países han sufrido las consecuencias negativas de la globalización. Mientras que las capas profesionales de mayor educación y posibilidades se conectan a través del planeta en una nueva formación de clases sociales, que separa a las élites cosmopolitas creadoras de valor en el mercado mundial de los trabajadores locales devaluados por la deslocalización industrial, desplazados por el cambio tecnológico y desprotegidos por la desregulación laboral. La desigualdad social resultante entre valorizadores y devaluados es la más alta de la historia reciente. Es más, la lógica irrestricta del mercado acentúa las diferencias entre capacidades según lo que es útil o no a las redes globales de capital, de producción y de consumo, de modo que además de desigualdad hay polarización, es decir los ricos son cada vez más ricos, sobre todo en la cúspide de la pirámide, y los pobres cada vez más po-

bres. Esta dinámica juega a la vez en las economías nacionales y en la economía mundial. De modo que aunque la incorporación de cientos de millones de personas del mundo de nueva industrialización, dinamiza y amplía el mercado mundial, la fragmentación de cada sociedad y entre cada país se acentúa. Pero los gobiernos nacionales, casi sin excepción, hasta ahora, decidieron unirse al carro de la globalización para no quedarse fuera de la nueva economía y del nuevo reparto de poder. Y para aumentar la capacidad competitiva de sus países, crearon una nueva forma de Estado: el Estado-red, a partir de la articulación institucional de los estados-nación, que no desaparecen, pero que se convierten en nodos de una red supranacional en la que transfieren soberanía a cambio de su participación en la gestión de la globalización. Este es claramente el caso de la Unión Europea, la construcción más audaz del último medio siglo, como respuesta política a la globalización. Sin embargo, cuanto más se distancia el Estado-nación de la nación que representan, más se disocian el Estado y la nación, con la consiguiente crisis de legitimidad en las mentes de muchos ciudadanos a quienes se mantiene al margen de decisiones esenciales para su vida que se toman más allá de las instituciones de representación directa.

A esa crisis de la representación de intereses se une una crisis identitaria como resultante de la globalización. Cuanto menos control tienen las personas sobre el mercado y sobre su Estado más se repliegan en una identidad propia que no pueda ser disuelta por el vértigo de los flujos globales. Se refugian en su nación, en su territorio, en su dios. Mientras que las élites triunfantes de la globalización se proclaman ciudadanos del mundo, amplios sectores sociales se atrincheran en los espacios culturales en los que se reconocen y en donde su valor depende de su comunidad y no de su cuenta bancaria. A la fractura social se une la fractura cultural. El desprecio de las élites al miedo de la gente de salir de lo local sin garantías de protección se transforma en humillación. Y ahí anidan los gérmenes de la xenofobia y la intolerancia. Con la sospecha creciente de que los políticos se ocupan

del mundo pero no de ellos. La identidad política de la ciudadanía, construida desde el Estado, va siendo reemplazada por identidades culturales diversas portadoras de sentido más allá de la política.

Las contradicciones latentes en la economía y la sociedad transformadas por la globalización, la resistencia identitaria y la disociación entre Estado y nación, aparecieron a la luz de la práctica social en la crisis económica de 2008-2010. Porque las crisis son momentos reveladores de las fallas de un sistema y por tanto ejercen la mediación entre las tendencias de fondo de una sociedad, la conciencia de los problemas y las prácticas que emergen para modificar las tendencias que se perciben como perjudiciales para las personas aunque sean funcionales para el sistema. En la raíz de la crisis de legitimidad política está la crisis financiera, transformada en crisis económica y del empleo, que explota en Estados Unidos y Europa en el otoño de 2008. Fue en realidad la crisis de un modelo de capitalismo, el capitalismo financiero global, basado en la interdependencia de los mercados mundiales y en la utilización de tecnologías digitales para el desarrollo de capital virtual especulativo que impuso su dinámica de creación artificial de valor a la capacidad productiva de la economía de bienes y servicios. De hecho, la espiral especulativa hizo colapsar a una parte sustancial del sistema financiero y estuvo a punto de generar una catástrofe sin precedentes. Al borde del precipicio, los gobiernos, con nuestro dinero, salvaron al capitalismo. Botón de muestra: una de las instituciones literalmente quebrada fue AIG, la aseguradora estadounidense que aseguraba a la mayor parte de los bancos en el mundo. Si hubiese caído como Lehman Brothers, hubiera arrastrado al conjunto de sistema. La salvó el gobierno de Estados Unidos (con acuerdo de Obama, que era presidente electo) comprando el 80% de sus acciones, una nacionalización de hecho. Y así, país a país, fueron interviniendo los gobiernos, evidenciando la falacia de la ideología neoliberal que argumenta la nocividad de la intervención del Estado en los mercados. De hecho, las arriesgadas prácticas especulativas no asumen ningún riesgo porque saben que las grandes empresas finan-

cieras serán rescatadas en caso de necesidad. Y sus ejecutivos seguirán cobrando sus astronómicos bonos, incluidas compensaciones multimillonarias por cambiar de empleo. Además, incluso en caso de fraude, suelen irse de rositas. Tal y como pensaban en España los ejecutivos de Bankia o de muchas cajas de ahorro hasta que les salpicó la ola de indignación en todo el país.

La crisis económica y las políticas que la gestionaron en Europa fueron un elemento clave en la crisis de legitimidad política. Primero por la magnitud de la crisis, que de las finanzas se extendió a la industria por el cierre del grifo del crédito, sobre todo para las pymes, las principales empleadoras. Se llegaron a tasas de paro nunca vistas, que afectaron sobre todo a los jóvenes. En España, cientos de miles tuvieron que emigrar y los que al final encontraron trabajo tuvieron que aceptar condiciones de precariedad que prolongaron sus dificultades de vida por tiempo indefinido. Pero aún más dañino y más revelador fueron las políticas de austeridad impuestas por Alemania y la Comisión Europea, con una camisa de fuerza de modelo germánico sin prestar atención a las condiciones de cada país. Ahí se gestó la desconfianza profunda hacia la Unión Europea, que apareció como instrumento de disciplina más que de solidaridad.

El agravio comparativo fue aún mayor porque se taparon agujeros financieros derivados de la especulación y el abuso de sus responsables en el caso de España, con la permisividad del Banco de España, al mismo tiempo que se recortaban severamente los gastos en salud, educación e investigación. De forma que el Estado protector priorizó la protección de los especuladores y defraudadores sobre las necesidades de los ciudadanos golpeados por la crisis y el paro. Y aunque el caso de España es particularmente sangrante, porque Zapatero y Rajoy llegaron a cambiar la sacrosanta Constitución al dictado de Merkel y la Comisión Europea a cambio de que reflotaran a los bancos y a la deuda pública, el mismo tipo de prácticas de austeridad se impuso en toda Europa. No así en Estados Unidos, en donde la Administración de Obama aumentó el gasto público, sobre todo en infraestructura, educa-

ción e innovación, permitiendo a Estados Unidos salir de la crisis mucho antes que Europa. Mientras que en nuestro entorno, la crisis económica se extendió a la crisis del Estado del Bienestar, con la participación de la socialdemocracia en las políticas que condujeron a esa crisis. Algo que le pasó factura decisiva en Francia, Alemania, Escandinavia, Reino Unido, Holanda y también en España, en donde las bases socialistas se sintieron traicionadas, incrementando la desconfianza política en los partidos tradicionales.

Y precisamente en el momento en que más sacrificios se exigió a los ciudadanos en todos los países para salir de la crisis, en algunos países, y en particular en España, empezaron a destaparse una retahíla de casos de corrupción política que acabó por minar de raíz la confianza en los políticos y en los partidos. En buena parte los escándalos se incrementaron en las administraciones del Partido Popular, que llegó al gobierno en noviembre de 2011 y aprovechó su control político de la justicia para intentar detener las investigaciones de corrupción en todos los niveles del Estado. Sin embargo, la profesionalidad de fuerzas policiales como la Guardia Civil permitió sacar a la luz al menos una parte importante de la corrupción sistémica que corroe a la política, en las llamadas tramas Gürtel, Púnica, Lezo y muchas otras.

En todos los casos se combinaban la financiación ilegal del PP con el lucro personal de dirigentes e intermediarios, en particular en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, que establecieron, según la Guardia Civil, una organización criminal de apropiación de fondos públicos y de coimas de las empresas. Pero la corrupción fue más allá del PP, llegando incluso a la Corona y motivando, en parte, la abdicación del rey Juan Carlos, aunque él no estuvo implicado personalmente. Simultáneamente se reveló la corrupción sistémica del partido nacionalista catalán de Jordi Pujol, en el poder durante veintitrés años, y que estableció una coima oculta del 3% al 5% sobre obra pública, para el beneficio del partido y de algunos de sus dirigentes, empezando por la familia presidencial regida por la autodenominada «Madre

Superiora». Tampoco se salvó de la corrupción el PSOE, en particular en Andalucía, donde su victoriosa maquinaria electoral se engrasó durante años mediante subsidios fraudulentos de empleo y formación en beneficio del partido. El asqueo ciudadano con la corrupción sistémica de la política fue un factor determinante en la falta de confianza en representantes a quienes pagaban los ciudadanos y que, además, se agenciaban un generoso sobresueldo aprovechándose del cargo y expoliando a las empresas.

Aunque la política española es una de las más corruptas de Europa, la corrupción política es un rasgo genérico de casi todos los sistemas políticos, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, y uno de los factores que más ha contribuido a la crisis de legitimidad. Porque si los que tienen que aplicar las reglas de convivencia no las siguen ellos mismos, ¿cómo seguir delegando en ellos nuestras atribuciones y pagando nuestros impuestos? Suele argumentarse que se trata solo de algunas manzanas podridas y que eso es normal teniendo en cuenta la naturaleza humana. Pero, con algunas excepciones, como Suiza o Escandinavia (pero no Islandia), la corrupción es un rasgo sistémico de la política actual. Puede ser que lo fuera siempre, pero se supone que la extensión de la democracia liberal debería haberla atenuado en lugar de incrementarla en época reciente como parece ser el caso, según los informes de Transparency International. ¿Por qué es así? En parte se debe al alto coste de la política informacional y mediática, que analizaré unos párrafos más abajo. No hay correspondencia entre la financiación legal de los partidos y el coste de la política profesional. Pero es difícil aumentar las asignaciones del presupuesto público a los partidos habida cuenta de la poca estima de los ciudadanos. Es el pez que se muerde la cola: no hay que pagar más a los corruptos y por tanto los políticos se tienen que hacer corruptos para pagar su actividad y, en algunos casos, hacerse con un peculio por su intermediación. Pero hay algo más profundo. Es la ideología del consumo como valor y del dinero como medida del éxito que acompaña al modelo neoliberal triunfante, centrado en el individuo y su satisfacción inmediata mone-

tizada. En la medida en que las ideologías tradicionales, fuesen las igualitaristas de la izquierda, o del servicio a valores de la derecha clásica, han perdido arraigo, la búsqueda del éxito personal a través de la política tiene relación con la acumulación personal de capital aprovechando el tiempo en el que se detentan posiciones de poder. El cinismo de la política como manipulación deriva al cabo del tiempo en un sistema de recompensas que se alinea sobre el mundo de la ganancia empresarial en la medida en que se concibe la política como una empresa. En fin, no hay corruptos sin corruptores, y en todo el mundo la práctica de las grandes empresas incluye comprar favores al regulador o al contratador de obra pública. Y como muchos lo hacen, hay que entrar en el juego para poder competir. Así es como la separación entre lo económico y lo político se difumina y como las proclamadas grandezas de la política suelen servir para disfrazar las miserias de la misma.

La autodestrucción de la legitimidad institucional por el proceso político

La lucha por el poder en las sociedades democráticas actuales pasa por la política mediática, la política del escándalo y la autonomía comunicativa de los ciudadanos. Por un lado, la digitalización de toda la información y la interconexión modal de los mensajes ha creado un universo mediático en el que estamos permanentemente inmersos. Nuestra construcción de la realidad, y por consiguiente nuestro comportamiento y nuestras decisiones, dependen de las señales que recibimos e intercambiamos en ese universo. La política no es una excepción a esa regla básica de la vida en la sociedad red en la que hemos entrado de lleno. En la práctica solo existe la política que se manifiesta en el mundo mediático multimodal que se ha configurado en las dos últimas décadas. En ese mundo los mensajes mediáticos que forman opinión deben ser extremadamente sencillos. Su elaboración es posterior a su impacto. El mensaje más impactante es una imagen. Y la imagen más sintética es

un rostro humano, en el que nos proyectamos a partir de una relación de identificación que genera confianza. Porque, como sabemos, aprendiendo de la neurociencia más avanzada, la política es fundamentalmente emocional por más que les pese a los racionalistas anclados en una Ilustración que tiempo ha perdió su lustre. A partir de ese primer reflejo emocional que marca nuestro universo visual emocional procedemos al proceso cognitivo de elaboración y decisión. La impresión se va haciendo opinión. Y se corrobora o desdice en la elaboración del debate continuo que tiene lugar en las redes sociales en interacción con los medios. La comunicación de masas se modela mediante la autocomunicación de masas a través de Internet y las plataformas inalámbricas omnipresentes en nuestra práctica. La dinámica de construcción de un mensaje sencillo y fácilmente debatible en un universo multiforme conduce a la personalización de la política. Porque es en torno al liderazgo posible de una persona que se construye la confianza en la bondad de un proyecto. Siendo así, la forma de lucha política más eficaz es la destrucción de esa confianza a través de la destrucción moral y de imagen de la persona que se postula como líder. Los mensajes negativos son cinco veces más eficaces en su influencia que los positivos. Por tanto, se trata de insertar negatividad de contenidos en la imagen de la persona que se quiere destruir para eliminar el vínculo de confianza con los ciudadanos. De ahí la práctica de operadores políticos profesionales de buscar materiales dañinos para líderes políticos determinados, manipulándolos e incluso fabricándolos para aumentar su efecto destructivo. Tal es el origen de la política del escándalo, descrita y teorizada por el sociólogo de Cambridge John Thompson, que aparece en primer plano de los procesos políticos de nuestro tiempo en todos los países. Y como hay que estar prevenido para ataques insidiosos, todo el mundo acumula munición y, por ofensa o defensa, todos acaban entrando en el juego de la política escandalosa, tras cuya opaca cortina desaparecen los debates de fondo. En realidad, los estudios demuestran que es ya algo tan habitual que las victorias o derrotas de los políticos no siguen

necesariamente el curso de los escándalos. Frecuentemente, la gente acaba prefiriendo a «su corrupto» frente al corrupto de enfrente porque como todos lo son, en la percepción general, eso ya está descontado, salvo los casos de políticos vírgenes a quienes les puede durar la aureola un tiempo. Pero si los efectos de la política del escándalo son indeterminados sobre políticos específicos, hay un efecto de segundo orden que es devastador: inspira el sentimiento de desconfianza y reprobación moral sobre el conjunto de los políticos y de la política, contribuyendo así a la crisis de legitimidad. Y como en un mundo de redes digitales en las que todo el mundo puede expresarse no hay otra regla que la de la autonomía y la libertad de expresión, los controles y censuras tradicionales saltan por el aire, los mensajes de todo tipo forman un oleaje bravío y multiforme, los *bots* multiplican y difunden imágenes y frases lapidarias por miles, y el mundo de la posverdad, del que acaban participando los medios tradicionales, transforma la incertidumbre en la única verdad fiable: la mía, la de cada uno. La fragmentación del mensaje y la ambigüedad de la comunicación remiten a emociones únicas y personales constantemente realimentadas por estrategias de destrucción de la esperanza. Para que todo siga igual. Aunque el principal efecto de esta cacofonía político-informativa es la puesta en cuestión de todo aquello que no podemos verificar personalmente. El vínculo entre lo personal y lo institucional se rompe. El círculo se cierra sobre sí mismo. Mientras, buscamos a tientas una salida que nos devuelva esa democracia mítica que pudo existir en algún lugar, en algún tiempo.

2. TERRORISMO GLOBAL: LA POLÍTICA DEL MIEDO

El miedo es la más potente de las emociones humanas. Y sobre esa emoción actúa el terrorismo indiscriminado, aquel que mata, mutila, hiere, rapta o enajena en cualquier tiempo y espacio para anidar el miedo en la mente de las personas. Sus efectos sobre la política son profundos porque allí donde hay miedo surge la política del miedo. A saber, la utilización deliberada del obvio deseo de protección de la gente para establecer un estado de emergencia permanente que corroe y últimamente niega en la práctica las libertades civiles y las instituciones democráticas. Aunque terrorismo, miedo y política siempre han formado un siniestro *ménage à trois*, en las dos últimas décadas han ido ocupando el frontispicio de la vida cotidiana, de forma que, en muchos países, hemos entrado en un mundo en el que los niños crecen en el miedo. Y en el que los ciudadanos aceptan que los vigilen y los controlen electrónicamente, que los cacheen en sus viajes, que los detengan preventivamente, que militaricen su espacio público. Porque estas